

Diciembre de 2001 argentino en clave geopolítica: entre las luchas populares y las disputas interburguesas¹

Julián Bilmes, FaHCE-UNLP, juli.bilmes@hotmail.com.

Nota introductoria

El resultado de las elecciones nacionales de 2015, con la imposición de la alianza “Cambiemos” y el programa político económico de claro signo neoliberal que comenzó a llevar adelante el gobierno de Macri, buscando cerrar la experiencia ‘maldita’ que representó el kirchnerismo para las clases dominantes de nuestro país –al decir de Cooke-, nos han motivado a estudiar y reseñar cómo se construyó la caída del régimen neoliberal de la década del ’90 en nuestro país, cristalizada en diciembre del 2001, con el fin de encontrar claves de análisis sobre posibles cursos de evolución de la realidad político-social nacional en la actualidad. De cara a una nueva etapa de repliegue del campo popular en nuestro país, buscamos poner la lupa en la compleja conjunción de factores y fuerzas sociales que llevaron al derrumbe del neoliberalismo, con la intuición y esperanza de que esa conjunción puede volver a hilvanarse de alguna manera en la actualidad, y de que uno en tanto cientista social pueda estar a la altura de su comprensión.

Nos abocaremos a estudiar, por lo tanto, cómo se fue constituyendo un movimiento de protesta y oposición al gobierno (de Menem en un primer momento, de la Alianza luego) propio de los sectores populares, desde mediados de la década del ’90 e intensificándose hasta llegar al 2001 con el derrumbe en diciembre; a la par que se buscará revisar también cómo operaron e incidieron en este mismo proceso las disputas interburguesas, del ‘bloque en el poder’ y del Estado (es decir, de las clases dominantes). Se busca así indagar y poder dar cuenta de cómo se articulan, condicionan e influyen las disputas intercapitalistas con las formas de protesta, acción colectiva y cuestionamiento “desde abajo” propias del campo popular², tomando como hipótesis de trabajo (que retoma a los teóricos del materialismo histórico) que la “crisis en las alturas” (es decir, las disputas interimperialistas e intercapitalistas en cierto grado de su enfrentamiento),

¹ La versión original de este estudio fue realizada como trabajo final de la cátedra “Análisis de la sociedad argentina”, a cargo del Prof. Aníbal Viguera, correspondiente al año 2014.

² Utilizaremos la categoría política de ‘campo popular’, o ‘pueblo’, como la expresión en el campo político, de los conflictos y luchas sociales, de lo que a nivel estructural de las relaciones sociales de producción de nuestra sociedad constituyen tanto las acciones de la clase obrera –ocupada y desocupada- como la pequeña burguesía técnica y profesional. Como se verá en adelante, esta concepción resulta pertinente al análisis de las luchas sociales del período, sus articulaciones, alianzas y alineamientos.

generan condiciones de posibilidad (emergencia, desarrollo, potenciación) a las luchas del campo del pueblo –o del trabajo, en la formulación marxista. Por último, afirmaremos la primacía de la escala internacional para un abordaje de esta crisis y disputa interburguesa, en clave geopolítica.

Luchas sociales y constitución de un movimiento de oposición

Los años 90 en nuestro país dieron cuenta de la imposición del gran capital financiero transnacional en las políticas económicas del gobierno menemista, en sintonía con el “fin de la historia” preconizado por sus usinas de pensamiento –producto de la caída de la URSS y el muro de Berlín-, a la par que se asistía al auge de la globalización financiera neoliberal (Formento y Merino, 2011). Utilizando los análisis y periodizaciones de Bonnet y Piva, encontramos que producto de la hiperinflación de 1989 se da lugar a una ofensiva del capital “que transformó radicalmente el modo de acumulación y su corazón: las formas concretas de explotación de la fuerza de trabajo” (2009: 22), implicando una fragmentación estructural del trabajo y la amenaza de desempleo como instrumentos disciplinadores. Estos análisis estructurales dan cuenta de la postura defensiva asumida por el movimiento obrero, y la disminución de luchas y respuestas a esta ofensiva capitalista, así como la adecuación de las direcciones sindicales a este proceso, comandada por la estrategia ‘neoparticipacionista’ del grupo de “los 15” dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT), que se impondría una vez fracasada a fines de 1990 la estrategia confrontativa expresada por Ubaldini.

Se aprecian entonces, según Piva (2009), dos grandes etapas en cuanto a la conflictividad obrera: una que va hasta 1995, marcada por el descenso de las luchas por salarios y el aumento de las luchas defensivas (de los puestos laborales frente a los despidos y del pago de salarios), y una segunda etapa a partir del '96, una vez consolidadas las altas tasas de desempleo, en la cual descienden ambos tipos de conflicto, si bien crecen fuertemente las luchas de los desocupados. La quiebra de la resistencia sindical brindó la posibilidad de fragmentar el conflicto obrero e imponer a su vez el desempleo como mecanismo disciplinador.

En este marco, se menciona en la bibliografía sobre el tema la aparición de nuevas formas de resistencia, y dos grandes ciclos de protesta: uno hacia 1993-94 con los estallidos provinciales, y otro hacia 1996-97 donde surge el movimiento piquetero. A su vez, se resalta el importante rol asumido por el sindicalismo disidente, a lo interno de la CGT con el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) conducido por Moyano, y por fuera de la tradicional confederación obrera, la naciente CTA, que apostaba a nuevas formas de construcción basadas

en la autonomía sindical con respecto a los partidos políticos y la democracia de base. En 1994 la CTA impulsa la 'Marcha Federal', y junto con el MTA convocan a una primera huelga general, que inicia toda una serie de estas medidas de lucha en adelante. Adoptan, así, una estrategia confrontativa similar a la de la CGT Ubalini en los años '80, la cual contemplaba tanto la multiplicación de los tipos de protesta (marchas federales, cortes de ruta, petitorios), como la constitución de amplias multisectoriales que nucleaban a diferentes sectores perjudicados por las reformas estructurales.

Sin embargo, es recién en 1996-1997 cuando emerge un contundente ciclo de protesta y movilización popular, con los cortes de rutas como novedosa forma de lucha, y situado en las provincias de Neuquén y Salta, ciudades muy ligadas a YPF -la mayor empresa productiva del Estado. Estos conflictos darían inicio al movimiento piquetero, denominado así por la prensa debido a la forma de expresión de estas luchas (el "piquete"), y en donde un nuevo sujeto social comenzaría a nacer y a dar el salto a la política, los desocupados. En el conurbano bonaerense se ubica un segundo afluente de este movimiento, afirma Svampa (2005), con una fuerte organización en los precarizados y empobrecidos barrios populares. El movimiento piquetero ocuparía desde entonces un rol cada vez más relevante, interviniendo fuertemente en el espacio público, concitando renovados apoyos sociales y jaqueando puntos clave de la circulación de mercancías en el territorio nacional.

Para entender las condiciones de posibilidad de este ciclo de protesta, recurrimos a Piva, quien afirma que desde 1997 "se pusieron de manifiesto dificultades en el ejercicio de las funciones hegemónicas del Estado. Los conflictos tendieron a nacionalizar sus efectos políticos [y] generalizarse espacialmente", con el dato central de "la activación de fracciones de los 'sectores medios' que tendieron a movilizarse contra la represión y a dar apoyo a las demandas de quienes protestaban" (p. 26). El autor busca en las condiciones estructurales de reproducción social y al nivel de las relaciones sociales de producción la base de la explicación de esta ruptura del marco en que se producen las luchas sociales. Observa que los "mecanismos coercitivos de producción de consenso" propios de la primera mitad de la década del 90 (la amenaza hiperinflacionaria, el alto desempleo y la fragmentación de la clase obrera) ya no funcionan como antes, y lo adjudica a un proceso de pauperización a que se ven sometidas fracciones considerables de la pequeña burguesía, con respecto a sus ingresos y condiciones de vida, y de expropiación de sus propiedades por parte de grandes capitales que impulsan una gran concentración y centralización de capital. Por ende, se quiebra el consenso y la adhesión al "modelo" por parte de amplios sectores de la población, especialmente de los "sectores medios"

—categoría que expresa a nivel sociocultural lo que es la pequeña burguesía y fracciones acomodadas del proletariado a nivel de las relaciones sociales de producción.

Es por ello que el incipiente movimiento piquetero encontraría condiciones favorables de acción, con un importante nivel de recepción y acompañamiento por parte de pequeños comerciantes y productores, el movimiento estudiantil, “vecinos”, organizaciones civiles en defensa de la educación o de los derechos humanos, etc., que lograrían decantar en un conglomerado heterogéneo de oposición social. Las diversas movilizaciones y protestas comenzarían pues a confluir y encontrar puentes de articulación a través de iniciativas del sindicalismo disidente de la CTA, la CCC y el MTA (de perspectivas políticas y modelos sindicales disimiles, pero unificadas en la lucha contra el enemigo común). Éstas involucraban a una fracción minoritaria de los trabajadores ocupados, pero en el marco de los cortes de ruta y puebladas post 1996, y con la activación de fracciones de los sectores medios, ganarían en impacto político y capacidad de articulación y conducción del movimiento popular. Es por ello que se avanza en la conformación de una mesa de enlace sindical, articulando con pequeños y medianos empresarios de la industria, el campo y el comercio, y luego se logra incorporar en un espacio multisectorial a la oposición política (UCR y FREPASO, fuerzas que compondrían la ‘Alianza’ que llevó a De la Rúa al poder en 1999).

El marco en que actuaban estas fuerzas sociales era de crisis de legitimidad, afirma Piva retomando el equipo de investigación de protesta social de Schuster, y ello lo adjudica a una contradicción que se da entre las necesidades del proceso de valorización del capital (reformas estructurales, fragmentación de la mano de obra, desempleo, etc.) y sus necesidades de legitimación, dado que la exclusión y pauperización de crecientes sectores sociales minaba su adhesión al modelo económico, en un primer momento muy exitoso.

Crisis, cambio de gobierno y agudización de las luchas

El escenario político y social cambia fuertemente desde fines del año 1998, con una fuerte recesión económica producto de las crisis externas, y con el recambio presidencial en 1999, al asumir el gobierno nacional la ‘Alianza’, y pasar el Partido Justicialista a la oposición — con lo que esto implicaba en términos de la movilización de las bases territoriales de intendentes, punteros, sindicalistas del peronismo. La situación económica se había complejizado post crisis del tequila en México en el ’95 (si bien Argentina había logrado sobrellevarla), pero toca fondo con las crisis del sudeste asiático en el ’97, en donde eclosiona el “esquema de apertura y liberalización en los otrora países modelo para el establishment internacional” (Cantamutto y

Wainer, 2013: 46). Los efectos de esas crisis, sumadas a las de Rusia y Brasil en el '98 y '99, complejizan fuertemente el panorama, con la salida de capitales de las economías periféricas, dejando en evidencia el alto grado de dependencia y debilidad del modelo de convertibilidad argentino frente a los shocks externos, en un contexto internacional que comenzaba a resultar desfavorable.

En este marco, la acción colectiva del movimiento piquetero adquiere entonces mayor vigor, y en el campo del sindicalismo, Moyano produce una nueva fractura al crear la CGT disidente, con la base del MTA e incorporando sindicatos que habían sido parte de la CGT oficial hasta entonces, y profundiza su estrategia confrontativa, convocando a 8 de las 9 huelgas generales que sobrevendrían, y varias movilizaciones.

Señalan Cantamutto y Wainer (2013) que desde mediados de 1999 hasta mediados de 2000 se da “una etapa de relativa calma en cuanto a luchas sociales, ya que muchos de los actores más movilizados habían depositado esperanzas en que se produjese un cambio de rumbo a partir de la asunción del nuevo gobierno” (ibíd.:51), sin embargo, al profundizarse la recesión económica e ir erosionándose la confianza depositada en las promesas de honestidad, transparencia y cambios del nuevo gobierno aliancista, la conflictividad social ascendió, con un nuevo ciclo de luchas. Resulta pertinente incorporar aquí la reconstrucción de la conflictividad social que realiza Gordillo (2010), específicamente desde fines del año 2000 hasta las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, y sus derivaciones.

A fines del año 2000 acontece un gran hecho que pone al movimiento piquetero a la ofensiva, luego del escándalo por las coimas en el Senado en torno a la ley ‘Banelco’ y la posterior renuncia del vicepresidente frepasista y de parte importante del gabinete. Se trata del “matanzazo”, un enorme corte de rutas por más de 20 días entre noviembre y diciembre, en el distrito más grande del conurbano bonaerense –LaMatanza- encabezado por Luis D’Elia, de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV)-CTA y Juan Carlos Alderete por la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Es allí que se comienza a percibir, afirma Gordillo, que el gobierno había perdido fuerza y cedía ante las demandas sociales, y que la acción política lograba conquistas o concesiones. Se desarrolla por ende, señala la autora, “un sentido de ‘agencia’, es decir, la percepción de que con la acción se pueden conseguir cosas o cambiar la situación existente” (ibíd.:127). Desde entonces, a lo largo de 2001 el accionar piquetero iría ganando en fuerza, heterogeneidad e impacto político y social, con importantes hechos en diferentes provincias del país. Ocurren sucesos trágicos que dejan muertos a causa del accionar represivo de las fuerzas de seguridad, los cuales aglutinan al movimiento piquetero.

Volviendo al análisis de Piva para una caracterización general de la conflictividad social de este año clave de 2001, en base a elaboraciones estadísticas elaboradas por el autor, éste indica que los sucesos de ese año fueron “el producto de un proceso de profundización de las tendencias observadas desde 1996” (ibíd.: 57). El 2001 aparece como “un año de crecimiento del número de conflictos de todas las fracciones de la clase obrera”, a la par que “presenta el máximo de todo el período en número de medidas de fuerza” (si bien el grueso de los trabajadores ocupados mantiene una posición de repliegue, afirma el autor), y se observa también “una mayor radicalidad entre quienes luchan, expresada en el aumento de la proporción de medidas de fuerza respecto del conflicto total”, y sin embargo, se aprecia a su vez el mayor porcentaje de conflictos perdidos para todas las fracciones de la clase obrera (ibíd.: 58-59). Resulta relevante esta caracterización de las luchas sociales de este año, para ir afinando el análisis frente a lo que sería el estallido decembrino.

Retornando al recorrido histórico, se da en marzo de 2001 el llamado “giro neoliberal” del gobierno de De la Rúa, con la entrada de López Murphy por Machinea en el Ministerio de Economía, quien implementa un programa de ajuste, resistido fuertemente por los estudiantes universitarios en especial. La resistencia genera su caída, y entra el padre del modelo en ese cargo, Cavallo. Afirma Gordillo que en base a la recesión económica y con estos cimbronazos políticos, se rompe la confianza de la base social del gobierno a causa del incumplimiento de las promesas renovadoras de campaña, y se cierran los canales institucionales de mediación de intereses, acotándose las decisiones claves al pequeño ‘entorno’ del gobierno.

Hacia mitad de año se llevan a cabo importantes acciones de lucha (paros, movilizaciones, concentraciones, etc.) por parte del sindicalismo disidente, contra problemáticas como el ajuste, la desocupación, la ley de “déficit cero” y descuento del 13% del salario de estatales, con altos niveles de participación y movilización. A fines de julio tiene lugar una gran Asamblea Nacional Piquetera en Buenos Aires, para coordinar una acción general en todo el país que incluiría cortes de ruta en 40 ciudades, reuniendo una gran variedad de organizaciones con diferencias políticas y estratégicas, pero unidas contra el adversario común. Se observa en general una intensificación de las luchas piqueteras, alentada por el recorte en la cantidad y montos de los planes sociales por parte del gobierno, y también por “la estrategia de descentralización en la asignación de éstos desde los municipios o redes de punteros a las organizaciones, lo que llevó a aumentar la movilización y acción directa de estas últimas para su obtención” (Gordillo, ibíd.: 126). Esta maniobra, que se coincide en interpretar como una táctica de la UCR gobernante para minar el poderío de gobernadores e intendentes del PJ –quienes ya

tramaban planes desestabilizadores-, representa un primer punto en donde apreciamos la utilidad de nuestra hipótesis de trabajo, dado que la ‘crisis en las alturas’ alentó, habilitó, potenció, las condiciones de la lucha popular.

Sin embargo, después de agosto caen los conflictos de estatales y desocupados. A principios de septiembre se lleva a cabo la segunda asamblea piquetera, pero las divergencias estratégicas generan una ruptura en tres grandes bloques: FTV-CCC, el Bloque Piquetero asociado a los partidos tradicionales de izquierda, y la CTD Aníbal Verón, de tendencia autonomista y nucleando a los diferentes Movimientos de Trabajadores Desocupados.

En octubre de ese año se producen las elecciones legislativas, las cuales marcaron un hito en la historia política argentina debido al inusitado fenómeno del “voto bronca”: un enorme porcentaje de votos negativos, es decir, en blanco, nulos o impugnados, conjunto que representó un 15% a nivel general, constituyéndose en “segunda fuerza”, llegando a alcanzar picos de hasta el 40% en importantes ciudades. Gordillo caracteriza este hecho como una acción colectiva, situada “en un terreno difuso entre la protesta, la resistencia y la desobediencia civil” (2010: 140).

Por último, y para finalizar este recorrido y primer apartado dedicado a las formas, etapas y características de las luchas populares en el período, recién hacia noviembre hubo un ascenso de los conflictos de los trabajadores ocupados, “de carácter defensivo y descentralizado, que manifestaba la profundización de la crisis... [y] con bajos niveles de articulación y organización” (Piva, 2009: 60). Las organizaciones de desocupados no recuperarían los niveles de lucha de agosto, y para diciembre se iniciarían los saqueos, se produciría el “corralito” y su gran resistencia, y la agudización de las luchas hasta producirse las históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuestión que dejaremos para el último apartado de este trabajo.

Disputas interburguesas y ‘crisis en las alturas’ hacia fines de los noventa

En este segundo apartado nos abocamos a la revisión de las disputas entre distintas fracciones del capital y su incidencia en la crisis del modelo de convertibilidad, a partir de 1999 luego de la devaluación del real brasileño y las crisis del sudeste asiático y Rusia.

Hay acuerdo en la bibliografía consultada (Cantamutto y Wainer, 2010; Castellani y Szkolnik, 2011; Kan, 2009) en identificar el año 1999 como el detonante de un fuerte enfrentamiento interburgués en nuestro país, a raíz de las crisis externas mencionadas y lo que significaron en términos económicos para diferentes fracciones capitalistas argentinas. En

palabras de Cantamutto y Wainer, “a partir de 1999 cayó la rentabilidad en el conjunto de grandes empresas, y especialmente en las industriales... lo cual generó un incremento de la presión de las entidades representativas de la gran burguesía por medidas que permitieran revertir o al menos paliar su situación” (ibíd.: 65). Kan reconstruye minuciosamente las formas específicas en que la crisis del MERCOSUR (producto de la devaluación del real brasileño a comienzos del '99) repercute en ciertas fracciones de la burguesía local, y las respuestas que opondrían ante ello.

Sin embargo, como señalan Cantamutto y Wainer, la asociación entre la dinámica económica y política no es automática, por lo que es necesario rastrear las formas específicas en que se fue expresando esta contradicción y posterior enfrentamiento, a través de los distintos agrupamientos corporativos de esta clase, sus posicionamientos, pronunciamientos y alianzas. A su vez, es importante destacar que en este conflicto incidieron también las luchas populares que reconstruíamos en el apartado anterior, que a lo largo de la década del '90 buscaron jaquear el orden social excluyente que se implantaba desde el Estado. Encontramos aquí un segundo punto de interés en que se anudan (condicionan, posibilitan, fomentan, impulsan) las luchas “de arriba hacia abajo” como “de abajo hacia arriba”.

Es importante recuperar en este punto el señalamiento que hacen estos autores en cuanto a que si bien ambos bloques se basaban en intereses económicos, sus posicionamientos ante cada coyuntura están mediados por la ideología y la política, buscando distanciarse de interpretaciones ‘economicistas’, ortodoxas en su utilización del instrumental marxista del análisis de clases sociales y fracciones de ellas. Compartimos este punto de vista: lejos de existir unilateralidad o unidireccionalidad en la determinación de la “estructura” sobre la “superestructura”, existen múltiples determinaciones de lo social, y entre ambas instancias es necesario identificar el plano de la política y lo político.

Se fueron conformando entonces, dos grandes bloques en el seno de las clases dominantes con “diferencias crecientes que implicaban visiones opuestas sobre el diagnóstico de la crisis y las formas posibles de su resolución” (ibíd.: 66-67). Estas diferencias pasaban por diversas cuestiones de política económica, pero en última instancia la controversia fundamental era sobre el tipo de cambio. De ahí que en Castellani-Szkolnik (2011) se los denomine como “devaluacionistas” y “dolarizadores”. Afirman Cantamutto y Wainer que se trataba de una disputa entre una profundización del neoliberalismo dentro del esquema vigente o bien cierto reformismo moderado. Lo que estaba en juego “no pasaba por cambios sustanciales en la relación capital-trabajo sino en cómo se debía desvalorizar el trabajo para relanzar el proceso de

acumulación capitalista” (ídem), lo cual implicaba efectos distintos en las condiciones de vida del pueblo.

Apreciamos coincidencias en los tres trabajos en identificar como propulsores de una devaluación (en un primer momento, encubierta, sin nombrarse como tal debido al fuerte consenso en torno a la convertibilidad que todavía existía en el grueso de la sociedad), principalmente a los sectores exportadores de la industria local, que competían en el mercado internacional con sus pares brasileños. “El Grupo Productivo fue su principal artífice, orientado por el sector devaluacionista de la UIA, que asume la conducción de la entidad fabril en abril de 1999” (Kan, *ibíd.*: 249). La Unión Industrial Argentina sería la entidad paradigmáticamente representativa de este sector, y con su ala ‘industrialista’ al frente, que rompería el G8, es decir, la “comunidad de negocios” de principios de los noventa, al armar el Grupo Productivo hacia 1999, junto con otras entidades empresarias del agro y la construcción. Esta fracción fue logrando crear un “amplio arco de solidaridades que incluía a diversos líderes sindicales y a varios políticos de los principales partidos” (Castellani y Szkolnik, *ibíd.*: 5), entre quienes se debe destacar a Duhalde por el PJ y Alfonsín por la UCR.

Para dar cuenta del trasfondo económico de este agudo enfrentamiento entre capitales, afirman Cantamutto y Wainerque en las condiciones de libre cambio planteadas por el régimen de convertibilidad, el tipo de cambio determinaba,

“además de un reacomodamiento de los precios relativos y de las tasas de ganancia en las distintas esferas, la supervivencia o no de segmentos enteros del capital nacional... era la variable clave que determinaba el grado de especialización de la economía argentina en el mercado mundial, y con ello, el margen que tenía la burguesía local (por lo general, con una menor productividad que la internacional) para poder competir exitosamente por el mercado interno o bien, en algunos casos, para acceder o incrementar su participación en el mercado mundial o regional” (*ibíd.*: 70).

Por su parte, por el lado de quienes buscaban mantener el esquema de convertibilidad, y avanzar hacia su profundización con la dolarización, se ubicaban “los bancos privados (en su mayoría extranjeros) nucleados en ABA, empresas de servicios públicos privatizadas... los representantes de los acreedores en el exterior y el FMI” (*ibíd.*: 81), expresados en las orbitas de lo político por el propio presidente De la Rúa, por la UCR, y paradigmáticamente Menem por el PJ (el ministro Cavallo, mentor del modelo, alternó pragmáticamente su posicionamiento según las conflictivas coyunturas). Señalan Cantamutto y Wainer que este grupo contó como aliado clave con la gran burguesía comercial de la Cámara Argentina del Comercio, y con aliados eventuales, especialmente la gran burguesía pampeana (Sociedad Rural y Confederaciones

Rurales), que oscilaron entre ambos bandos según las coyunturas por compartir intereses tanto con la burguesía industrial como con el capital financiero.

Es necesario añadir el señalamiento realizado por Kan, quien recupera a diversos autores (Basualdo, Ferrer, Jaguaribe, Rapoport, etc.) en la identificación de un punto muy importante que se ponía en juego en esta disputa, referente a la inserción internacional de la economía argentina –lo cual implica alineamientos geopolíticos muy disimiles, a su vez-: la disyuntiva ALCA o MERCOSUR. Mientras que el Área de Libre Comercio de las Américas representaba el esquema geopolítico y económico planteado desde EEUU para la región, marco en el cual se planteaban las propuestas dolarizadoras (frente a un mundo que se afirmaba que iba hacia un ordenamiento en tres grandes bloques: zona dólar, zona euro y zona yen), el Mercado Común del Sur representaba un incipiente proceso de integración regional del Cono Sur para hacer frente al proceso de globalización, o al menos para poder comerciar en mejores términos.

El devenir de los hechos

El gran detonante de esta disputa interburguesa, lo hemos dicho ya, fue la devaluación del real brasileño a principios de 1999. Afirman Castellani y Szkolnik que ello “colocó en primer plano la discusión pública sobre el futuro del régimen de convertibilidad” (ibíd.: 5). Recién a partir de entonces aparecen visibles estas manifestaciones, las cuales van delineando la existencia de estos dos grandes bloques. Realizan estos autores un análisis de las estrategias discursivas de ambos bandos y los argumentos con los cuales los sostenían, con el fin de aprehender en fino la dinámica de este conflicto. Ya para ese entonces, tanto la UIA como la Cámara Argentina de Exportadores piden al gobierno medidas compensatorias, y obtienen el apoyo de la CGT disidente de Moyano en este punto –si bien se distancia en cuanto a las pretensiones de avanzar con la flexibilización laboral.

Por el otro ‘bando’, en marzo de ese año, aparece un documento del FMI proponiendo la dolarización, seguido en el mes de mayo de un detallado plan en el mismo sentido por parte del presidente del Banco Central, Pou. La gran oposición que despertaron ambas manifestaciones, por parte de economistas, políticos, empresarios, sindicalistas, logró frenar estas iniciativas.

Para fines de marzo, se producía también un hecho importante: la asamblea de la UIA para debatir el ‘futuro de la convertibilidad’ (abiertamente planteado, lo cual representaba una novedad) al calor de la crisis producida por la devaluación brasileña, en donde desplazan su antigua conducción, cercana al gobierno menemista (Álvarez Gaiani, proveniente de la agroindustria y su entidad COPAL –Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios-) por

una alianza ‘industrialista’: como presidente se designa a Rial, presidente de la UIPBA (Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires) y como vicepresidente a De Mendiguren, empresario textil. Si bien provenían de distintos agrupamientos dentro de la misma central (del MIA el primero y del MIN el segundo), forjaron una alianza en torno a la política a seguir. “Los primeros pasos consistieron en lanzar el ‘compre nacional’ o ‘compre argentino’ y en reivindicar la ‘industria nacional’” (Kan, *ibíd.*: 245). Comenzaban a profundizar el enfrentamiento con los sectores del capital financiero, ‘foráneos’ y especulativos en su caracterización.

Ya en el año 2000, son las centrales sindicales quienes juegan de “punta de lanza” de este bloque devaluacionista, tanto por parte de la CGT oficial –Daer, su representante, se pronunciaba entonces por los “sectores nacionales de la producción y el trabajo”-, mientras que la CGT disidente de Moyano “elevópúblicamente un reclamo expreso de devaluación... horadando las bases del consenso social construido en torno a la convertibilidad” (Castellani y Szkolnik, *ibíd.*: 11). Cantamutto y Wainer leen este acercamiento de Moyano con el Grupo Productivo como una “alianza estratégica”, cuya conducción pretendió disputar, llamando a inicios del 2001 un “Frente Nacional, Social y Productivo”, el cual no encontraría eco.

En marzo de ese decisivo año 2001, precisamente, suceden cambios relevantes en el gobierno nacional, con fuertes implicancias en este conflicto interburgués. Renuncia en el Ministerio de Economía Machinea, de estrechos vínculos con la UIA y especialmente con el grupo Techint, quien había colocado inclusive un cuadro propio como secretario de Industria en tal gestión. Asume en el cargo López Murphy, “economista ortodoxo [que] era un conspicuo representante del capital financiero” (Cantamutto y Wainer, *ibíd.*: 84), el cual despertó tales resistencias que debió abandonar a las pocas semanas, asumiendo en su lugar el ideólogo del modelo, Cavallo, quien intentó salir de la crisis con medidas heterodoxas, ganándose el apoyo inicial del bloque ‘devaluacionista’. Presionó, así, por mantener el esquema monetario de convertibilidad con algunos “retoques”, buscando evitar tanto una devaluación como la dolarización. Sin embargo, el enfrentamiento entre capitales era ya tan fuerte que las presiones de uno y otro lado impidieron la consolidación de esta propuesta de “convertibilidad ampliada”.

En agosto de ese año el país renovaba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de aumento del “blindaje financiero”, a cambio de que el gobierno nacional lograra que las provincias efectuaran un ajuste para ajustarse a la ley de “déficit cero”. Sin embargo, el fracaso de esta medida, como también del subsiguiente “megacanje”, y la “falta de apoyo del FMI al gobierno argentino no sólo abortó la posibilidad real de la dolarización, sino que provocó la pérdida de sustento del propio régimen cambiario vigente” (Cantamutto y Wainer, *ibíd.*: 95).

A fines del 2001 ya incluso se rompía la alianza ‘dolarizadora’, dado que los bancos públicos y cooperativos nucleados en ABAPPRA apoyan el plan económico del bloque devaluacionista, “lo que expresaba una ruptura interna en el propio sector financiero, uno de los principales apoyos al modelo” (ibíd.: 80).

Los determinantes sucesos de diciembre de 2001

En este tercer apartado apuntamos a estudiar la dinámica política del mes de diciembre de 2001, que comienza con el decreto de ‘corralito financiero’ –expresión de la crisis aguda que vivía para entonces el ‘modelo’, y que generaría enormes resistencias- y tiene en las históricas jornadas del 19 y 20 el estallido final de un ordenamiento económico, político y social profundamente excluyente. En base a la reconstrucción realizada en los dos apartados anteriores sobre las luchas populares e interburguesas previas a este momento final de tal ordenamiento, pretendemos aquí lograr conciliar ambas perspectivas, para ponerlas en juego observando sus interrelaciones, influencias, condicionamientos y articulaciones.

Con respecto al mes de diciembre como condensación de la gran crisis de hegemonía u ‘orgánica’ (económica, política, social, ideológica) que se venía generando, afirma Gordillo que la particularidad de tal mes reside en que se dieron las condiciones para la violencia popular. Según su perspectiva, en ese momento se logra confluir en unidad contra “adversarios comunes que hicieron posible unificar un sentido contundente y destituyente en la protesta” (ibíd.: 198), cristalizado esto en la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”, amalgamando diversos componentes: porteño, urbano, sindical, piquetero, plebeyo y antiautoritario.

Creemos que este análisis es representativo de todo un conjunto de interpretaciones que se han hecho sobre las jornadas del 19 y 20 de diciembre (tanto desde las ciencias sociales como desde las organizaciones políticas de izquierda), conceptualizadas como insurrección o rebelión popular, o más aún, como “Argentinazo”, que creemos que sobrevaloran el componente ‘popular’ de esas jornadas, sin ponderar lo suficiente en la incidencia de las fracciones burguesas que también (y sobre todo, vale decir) jugaban a derribar el orden –económico en este caso, sin las pretensiones antineoliberales o anticapitalistas de importantes fracciones del pueblo- y que creemos que tuvieron un decisivo rol en esa violencia y ese estallido. En el mismo sentido, consideramos erróneo la asignación de un carácter predominantemente “espontáneo” a esas jornadas, como se aprecia en gran parte de la bibliografía, lo cual consideramos que aporta a una invisibilización que se produce sobre la incidencia burguesa en ellas. Pasamos entonces a

la reconstrucción de los sucesos de diciembre, para poder entender su dinámica general y ponderar ambos factores en la medida más justa posible.

El “corralito”: causas y efectos

No es menor que ese mes de diciembre se abra con el decreto del “corralito” (una restricción al retiro de fondos de los bancos), medida que concitó una férrea resistencia por parte de ahorristas y diversas fracciones de los sectores medios de la sociedad que saldrían a protestar unificándose con piqueteros, “vecinos” y sindicatos disidentes (como describe Piva), a la par que “ciertos expertos y agentes financieros, junto a ciertos medios, comenzaron a alertar sobre las consecuencias e inconstitucionalidad del ‘corralito’” (Gordillo, *ibíd.*: 176). Vemos que el bloque de oposición política, por ende, se fortaleció enormemente. Nos preguntamos entonces por las causas de una medida tan severa y que despertó tal nivel de rechazo.

Afirman Cantamutto y Wainer que “inmediatamente terminada la fase interna del canje de préstamos garantizados, y habiendo desembolsado ya US\$ 5.000 millones del paquete, el Fondo se negó a remitir los 3.000 millones restantes, que podían ser utilizados para financiar la fase externa de la reestructuración. Esto precipitó el ocaso de la Convertibilidad, forzando a la aplicación del ‘corralito financiero’” (*ibíd.*: 94). Por otro lado, encontramos en Castellani y Szkolnik que “en octubre se desató la primera corrida de magnitud contra el peso... [A lo que] el gobierno responsabilizó públicamente sólo a las empresas extranjeras” (*ibíd.*: 12). Estos hechos expresan, a nuestro entender, una voluntad de determinados sectores del capital financiero de quebrar el esquema monetario convertible con paridad cambiaria, para forzar sea una devaluación, una dolarización, o una conjunción de ambas. Como sostienen estos autores, “la disputa por la crisis del modelo se agudizó en el interior del FMI entre aquellos que exigían la devaluación y aquellos que defendían la propuesta dolarizadora. Incluso, se llegó a plantear que se implementaran conjuntamente, es decir devaluar para luego dolarizar. Cuando la fracción encabezada por Anne Krueger (partidaria de una devaluación) logró imponer su visión en el organismo de crédito, el camino para la ofensiva devaluacionista quedó definitivamente allanado.” (*Ídem*).

Encontramos, pues, que ambos trabajos dan cuenta de fuertes internas dentro del FMI y el gobierno de EEUU (su poder ejecutivo, su congreso, su Reserva Federal y su Tesoro, internas que suelen aparecer como “halcones” contra “palomas”), con posiciones disímiles sobre si debía propiciarse o no una dolarización en los países periféricos dependientes, y qué hacer en específico con el régimen argentino (al cual dominaban a través de los mecanismos de dependencia como el endeudamiento externo). Discrepamos, sin embargo, respecto de las conclusiones que se extraen sobre las causas de tales conflictos, su incidencia y relevancia.

Recurrimos pues al análisis del CIEPE (2011), en donde se adjudica el corte en el financiamiento del FMI a una fractura del núcleo de poder mundial, a raíz de un profundo enfrentamiento que se observa en EEUU desde la asunción de Bush en enero 2001, la crisis de las “punto.com” en marzo, y fundamentalmente con el gran hecho geopolítico de la “caída” de las Torres Gemelas en septiembre 2001. Según esta perspectiva, existía para ese entonces un conflicto y enfrentamiento de gran magnitud entre fracciones de capital financiero multinacionales y transnacionales: asentado uno de estos bloques especialmente en territorio estadounidense, con el complejo industrial-militar y financiero del Pentágono, las farmacéuticas y la industria bélica; mientras que las fracciones de capital financiero más desarrolladas (transnacionales globales), trascendían ya en su organización y territorialidad inclusive los Estados-nación de país central, desarrollando una red de ‘cities’ financieras a nivel global con gran asiento en Londres, Nueva York y Hong Kong. En este sentido, se lee que no fue el “terrorismo islámico” el responsable del derribo de las ‘Torres Gemelas’ (centro del comercio financiero mundial en aquel momento), como agitaron el gobierno estadounidense y los grandes medios de comunicación, sino este bloque de capitales financieros comparativamente retrasados (sea que se haya ideado, diseñado, ejecutado o solamente habilitado el hecho), como un fuerte golpe sobre el principal centro del poder de las fracciones ‘globalistas’, y que permitiría al presidente Bush, como representación de esos intereses, iniciar la cruzada contra el ‘enemigo islámico’, legitimado por la Doctrina de la Seguridad Nacional y las ideologías del “destino manifiesto” estadounidense y el “choque de civilizaciones” (Formento y Merino, 2011; Dierckxsens y Formento, 2016).

Por ende, se afirma aquí que ese bloque que apostó a la “caída” de las Torres Gemelas en septiembre de 2001, tenía como estrategia en nuestro país “generar la quiebra del sistema financiero argentino en general, por lo que impulsaban la salida de la convertibilidad por medio de una devaluación de los activos de los bancos y de las empresas de servicios asociados a los mismos, que le permita, luego, apropiarse de estos activos a precios de remate” (ibíd.: 5). Esta fracción de capitales financieros había sido perjudicado por la reestructuración de deuda del gobierno argentino diseñada por Cavallo, el ministro de Economía, que se lee aquí como representación orgánica del bloque de fracciones de capital financiero transnacionales ‘globalistas’. El ala del FMI comandada por Krueger había pedido inclusive la renuncia de este funcionario. A la par, este corte del financiamiento por parte del FMI había estado precedido, se dice, de un ataque especulativo el día 30 de noviembre, liderado por la banca más representativa de este bloque, JP Morgan-Chase Manhattan (banca que definía el índice de ‘riesgo país’, tan

relevante y nombrado por ese entonces), forzando una devaluación para luego dolarizar, tal como sostenía el ala de Krueger dentro del FMI³.

Este enfoque nos ayuda entonces a comprender los hechos de diciembre de 2001 con el estallido del 19 y 20, con una perspectiva que cambia el punto de partida del análisis. Mientras en Cantamutto y Wainer, Castellani y Szkolnik, y muchos otros trabajos se recurre al plano internacional como contexto o marco general en que suceden los hechos que se analizan en el plano nacional, en esta línea de análisis se parte de un abordaje geopolítico, de los ordenamientos, disputas y alineamientos a ese nivel para luego analizar en Argentina los hechos, y cómo actuaban en ellos esos intereses internacionales. El comportamiento de fracciones del capital (con sus mediaciones a nivel político e ideológico), no se explica aquí exclusivamente en función de sus intereses económicos inmediatos, sino que priman sus disputas estratégicas (a nivel geopolítico, y en base a ello, en el plano regional y nacional) como ordenador último de las posturas, posicionamientos y alineamientos de los actores económicos, políticos e ideológicos. Inclusive, se nos aparece especialmente útil una perspectiva de este tipo en un momento en donde habían sido cedidos los principales resortes de soberanía en materia de política económica, monetaria, fiscal (convertibilidad, endeudamiento, control del BCRA, Min. Economía, etc.).

Del corralito al 19 y 20: crónica de una muerte anunciada

Habiendo analizado lo que hace a la implementación del “corralito” y el marco geopolítico, resta analizar la dinámica política que llega hasta las jornadas del 19 y 20. Afirma Piva, en este sentido, que desde los primeros días de Diciembre, CAME y FEDECAMARAS, asociaciones de pequeños comerciantes, impulsaron protestas con alto impacto político y mediático, a la par que en los “apagones y cacerolazos” eran acompañados por vecinos de Capital Federal, hechos que eran transmitidos en directo por los principales medios. Vale decir aquí que el principal conglomerado mediático del país, el grupo Clarín, estaba alineado con el Grupo Productivo en ese entonces, por lo que se entiende la estrategia de visibilizar las protestas y resistencias contra el gobierno, incluso incitándolas y promoviéndolas (a las jornadas de lucha

³“Los números del ataque especulativo se harían sentir: el día 30 de noviembre de 2001 el retiro de los depósitos bancarios llegó a los 700 millones de dólares, el riesgo país marcó un nuevo record superando los 3574 puntos y las tasas interbancarias treparon más allá del 700% de interés anual para préstamos de corto plazo entre los bancos de primera línea. Para las operaciones en dólares, las tasas de interés rozaron el 200%” (CIEPE, 2011: 4). La lucha de capitales se da siempre, se afirma, en el plano económico como competencia entre mercancías y concurrencia entre capitalistas, y según el grado de enfrentamiento salta en determinados momentos a la órbita de las luchas político-sociales y la órbita ideológico-cultural con disputas por la hegemonía, la legitimidad de un orden; y puede devenir en lucha militar inclusive, como en las guerras mundiales.

del 19 y 20 las denominarían como “pacíficas” y “espontáneas”, para legitimarlas pero a la vez deslindarlas de las organizaciones políticas). Ya para este momento se observa claramente la articulación entre luchas “por arriba” y “por abajo”, unidas contra un adversario común.

“El ‘cacerolazo’ como instrumento de protesta, las asambleas populares como forma de organización y la identificación como ‘vecinos’ o ‘la gente’ fueron centrales en la participación de los ‘sectores medios’ en los sucesos de diciembre” afirma Piva (ibíd.: 61). El decisivo rol que jugarían en este contexto los sectores medios es señalado en gran parte de la bibliografía. Tomó fuerza en este contexto la manifestación de “ahorristas”, sectores medios perjudicados especialmente por el corralito y que realizaban escraches contra los bancos e instituciones gubernamentales, a lo que se sumaban los “cacerolazos” –de vecinos porteños por lo general, acorde al centralismo y ‘unitarismo’ dominantes en la sociedad-, en tanto manifestaciones “espontáneas” según las denominaban los medios de comunicación que las incitaban.

Por el lado del sindicalismo disidente se produce una importante medida de protesta –por sus efectos así como por la heterogeneidad de su convocatoria-: el paro del día 13 convocado por las tres centrales sindicales y apoyada por la CCC. Tanto la CTA, la CGT disidente e inclusive la CGT oficial (quien no había podido cerrar acuerdos deseados con el gobierno) convocaron a esta medida, contra los límites de extracción de las cuentas “sueldo”, contando con alto acatamiento. Esto fue acompañado por acciones de protesta del movimiento piquetero en distintos lugares del país (relata Gordillo las acciones de este sector en Mar del Plata, Pergamino y Rosario, con incidentes y fuertes enfrentamientos). El movimiento obrero, ocupado y desocupado, no se quedaba atrás y avanzaba con radicalidad en la búsqueda de derrotar las políticas neoliberales del gobierno. Por su parte, la CTA impulsaba la consulta del Frente Nacional contra la Pobreza en ese mismo 13 de diciembre y hasta el 17, con un gran acompañamiento e impacto social, pero que no logró los objetivos que se proponía con ello.

Por otro lado, y previo a entrar ya al análisis del 19 y 20, una importante acción colectiva producida en esos días, determinante a nuestro entender en el devenir de los sucesos, fueron los saqueos a comercios y supermercados. Estos hechos poseen gran relevancia a raíz de la sensación de “caos social” que aportarían fuertemente a generar, especialmente con la proliferación de los mismos en cantidad y extensión. Se encuentran discrepancias en la bibliografía en la delimitación temporal de estos hechos: Piva afirma que comienzan desde la primera semana de diciembre, crecen en número para el 12 y el 19 se vuelven masivos “en el Gran Buenos Aires, algunos barrios de Capital Federal, Rosario y otras ciudades y localidades del interior del país” (ibíd.: 61), mientras que Adamovsky indica que comenzaron el 14, “y para

el 22 de diciembre, fecha en que concluyeron, se habían producido en unos trescientos comercios de once provincias” (2012: 437), y por su parte, Gordillo, quien los reconstruye, analiza y describe en detalle, afirma que comienzan el día 13. Más allá de estas discrepancias, amerita un análisis y problematización sobre el sentido e interpretaciones de los mismos.

Advierte Gordillo que las primeras acciones no fueron saqueos sino peticiones de alimentos, ante las promesas de su entrega, y atribuye estos hechos al oportunismo que posibilitaba la situación, “pero que no implica falta absoluta de coordinación. Ésta existió en distintos grados” (ibíd.: 185-186). A su vez, afirma la autora que en ciertos lugares se contuvo este fenómeno a través de las propias organizaciones de desocupados, como el caso de la CCC en el norte del país. Entiende entonces a estos hechos como “formas de acción colectiva directa de carácter barrial... experiencias previas y oportunismo se habrían conjugado en la trama de los saqueos” (idem). El análisis de Adamovsky es similar, quien los entiende como una “reacción popular genuina”, aunque se habría entremezclado en ellos la política de la “zona gris”: “de una manera bastante evidente, en muchos de los saqueos de 2001 participaron punteros peronistas invitando a las barriadas a sumarse, haciendo circular rumores falsos sobre repartos de alimentos, gestionando ‘zonas liberadas’ o trayendo grupos de ‘vanguardia’ para iniciar las acciones. En varios casos se documentó la complicidad de la policía, que se retiró de los lugares señalados o incluso participó de los saqueos” (p.438).

Resulta útil en este punto vincular estos últimos datos con el trabajo de Formento (2015), quien estudia los saqueos de fines del año 2012 pero enlaza con los acontecidos en 2001 y en 1989. Afirma el autor que los saqueos nunca fueron espontáneos, sino organizados con objetivos desestabilizadores-destituyentes. Analiza para ello la compleja estructura y momentos en el desarrollo de los mismos: los grupos que los componen en su accionar práctico, los grupos que los coordinan y los que los idean o planifican. De acuerdo a este análisis, entonces, si bien desde el punto de vista de los “pobres estructurales” que los protagonizan se puede asignar un carácter ‘espontáneo’ a los mismos, hay sectores del poder económico y político que acumulan con ellos, y medios de comunicación que los visibilizan y amplifican. Se entiende a los saqueos, entonces, como “formas auxiliares de lucha para los golpes de estado destituyentes que encabezan fracciones del gran capital financiero. Forma de lucha que va acompañada siempre de otros instrumentos que le crean condiciones favorables como son: la hiperinflación, las corridas financieras, el desabastecimiento de bienes de consumo masivo, el bloqueo energético, etc.”. Esta perspectiva guarda relación directa con la que se presentaba sobre las causas del corte en el financiamiento del FMI a principios de diciembre, y con la tesis que se presentará sobre el 19 y 20 como golpe de estado, en sintonía con el fragmento citado. Por lo pronto, nos aporta otro

punto importante sobre la articulación entre las luchas populares con las luchas intercapitalistas, dado que se sostenga o no la tesis recién expuesta, el fragmento citado desde Adamovsky daba ya cuenta de cómo jugaron en estos hechos (sea planificándolos, incitándolos, promoviéndolos, o solamente habilitándolos) sectores políticos del PJ ligados a Duhalde y al Grupo Productivo.

Las jornadas del 19 y 20: el estallido del régimen

El 19 de diciembre, justamente, se da una ola de saqueos en distintos puntos del país y especialmente en el Conurbano Bonaerense, con enfrentamientos que “dejaron como saldo cincuenta detenidos y diez heridos. Al mediodía el presidente instruyó que se repartieran alimentos a través del Ejército y de la Gendarmería. Ese día terminó con el trágico saldo de seis muertos... todos producto de este tipo de acciones, con más de un centenar de heridos y detenidos y con el establecimiento por decreto del ‘estado de sitio’” (Gordillo, *ibíd.*: 183).

Sin embargo, el espiral de violencia crece, ya que el ‘estado de sitio’ despierta un sentir antiautoritario en los sectores medios, dice Gordillo, lo que motiva un gran ‘cacerolazo’ en la medianoche del 19 y madrugada del 20 con la consigna “que se vayan todos”, con una multitud de ciudadanos que se concentran en distintos puntos de Capital Federal (Plaza de Mayo, frente al Congreso, la casa de Cavallo, quien se vio forzado a renunciar, etc.). El día 20 se produce una fuerte represión contra los manifestantes, en una “batalla campal donde no se querían perder las posiciones ganadas” (*idem*), que deja un trágico saldo en muertos y heridos, mientras las centrales sindicales convocaron un paro pidiendo la renuncia del presidente De la Rúa, quien renuncia luego de fracasar en sumar a la oposición a un gobierno de coalición (invitación rechazada justamente por sectores ligados al Grupo Productivo como el PJ de Duhalde).

Como ya hemos mencionado, lejos de concebir a estas jornadas como una “insurrección” o “rebelión” popular (pero sin dejar de marcar y destacar la participación de fracciones del campo del pueblo en ellas), adscribimos a la tesis del CIEPE que explica a las mismas en términos de golpe de Estado, en tanto golpe a las correlaciones de fuerzas político-sociales cristalizadas, objetivadas, institucionalizadas en el gobierno del Estado. De acuerdo a lo que reconstruíamos en el segundo apartado del trabajo, existía un amplio entramado organizado contra el gobierno y sus políticas, expresado en el Grupo Productivo, que aglutinaba fracciones de burguesía y contaba con el respaldo táctico en ocasiones de fracciones populares por parte de las centrales sindicales -CGT disidente y oficial. Por ende, no resulta inverosímil aducir que este bloque jugó fuerte en esta coyuntura del 19 y 20 para derribar al gobierno de De la Rúa, que le resultaba adverso a sus intereses, apoyado en la mencionada fractura del núcleo de poder

mundial en EEUU y sus implicancias en términos de corridas financieras, quita de sustento por parte del FMI, etc.

“El 19 de diciembre se ejecuta finalmente un golpe de Estado conducido por la fracción de grupos económicos locales que pujan por la devaluación con pesificación y el Mercosur como proyecto estratégico de desarrollo productivo regional” (CIEPE, 2011: 6), por lo que estos sectores habrían organizado la ola de saqueos que se mencionaba previamente y propiciado los enfrentamientos. Luego, ante el ‘estado de sitio’ que impone De la Rúa, “se responde con la movilización de la CAME (cámara que nuclea pymes), la movilización del sector nacionalista católico (Vaticano) liderado por Seineldin, más la agitación permanente del grupo Clarín y otros medios para salir a la calle en contra del estado de sitio y del gobierno, a lo que se le suman los saqueos del conurbano organizados por los intendentes y grupos de desocupados financiados por el duhaldismo” (ídem). El campo popular, sus movimientos y organizaciones que venían creciendo en fuerza, jugaron aquí subordinados a uno de los polos de esta contradicción.

Por último, Merino (2013), quien retoma y desarrolla esta línea de análisis, analiza cinco puntos en los que se observa la incidencia del sector ‘devaluacionista’, o del Grupo Productivo en tanto agrupamiento de ese campo de fuerzas político-sociales, en los hechos del 19 y 20 de diciembre, y discute con interpretaciones que leen desde distintas corrientes teórico-políticas (desde el autonomismo hasta el marxismo ortodoxo), el 19 y 20 exclusivamente como “rebelión popular”, “insurrección”, “emergencia de una multitud instituyente”, sin dimensionar la disputa interburguesa en estos hechos y su centralidad explicativa. Señala entonces en primer lugar que este sector impidió “un cierre desde la política, negándose a formar parte de un gobierno de unidad” (ibíd.: 4). Luego, potenciaba y legitimaba la movilización popular, mientras que buscaba limitarla, controlarla y encauzarla para que no se saliera de sus objetivos. En tercer lugar, como hemos destacado ya, convocaban a la movilización desde medios afines como Clarín, reivindicando el carácter “espontáneo” y no “organizado” de la movilización. Por otra parte, disputando la significación del estallido, para instalar el discurso dominante sobre el mismo de acuerdo a sus objetivos políticos y económicos. Y en último lugar, generando “articulaciones y alianzas tácticas con el ‘campo popular’, a veces de hecho y otras veces bajo la forma de acuerdos, como sucedió con muchas organizaciones sindicales y movimientos sociales antes y después de diciembre de 2001”, plasmándose en puestos de gobierno, planes etc. (ídem).

A modo de conclusión

Para finalizar este trabajo, y retomando las inquietudes desde las cuales partimos para su elaboración, apreciamos que la ruptura del orden mundial que enmarcó el quiebre del régimen neoliberal en los sucesos de 2001, no se ha resuelto en la actualidad, encontrándonos hoy día en una aguda disputa interimperialista que ha abierto la posibilidad para ordenamientos pos-neoliberales –o inclusive pos-capitalistas-, de carácter productivo (no anclado en la valorización financiera) y multipolar (Dierckxsens y Formento, 2016). Esto nos da la pauta de la fragilidad e inestabilidad que puede encontrar el proyecto político-económico neoliberal del gobierno de Macri y los grandes capitales que expresa, en un mundo en profunda crisis –evidente en la ausencia de inversiones externas que se prometen desde el acuerdo con los Fondos Buitre, pero nunca efectivizadas. Por ende, la ‘crisis en las alturas’ (tanto en el plano internacional como en el nacional) que se observa en la actualidad, nos da la pauta de que el neoliberalismo puede volver a ser derrotado, con el gran desafío en nuestro presente de que el campo popular pueda estar a la altura de organizarse en unidad contra su enemigo común, más allá de las diferencias secundarias, retomar el poder del Estado y apostar a profundizar lo conquistado en 12 años de kirchnerismo.

Bibliografía

- Adamovsky, Ezequiel (2012). *Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Cantamutto, Francisco J. y Wainer, Andrés (2013). *Economía política de la convertibilidad: disputa de intereses y cambio de régimen*. Buenos Aires, Capital Intelectual.
- Castellani, Ana y Szkolnik, Mariano (2011). “‘Devaluacionistas’ y ‘dolarizadores’. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2001”. Documentos de investigación social, número 18, IDAES-UNSAM.
- CIEPE (Centro de Investigaciones en Política y Economía, 2011). "El golpe del 19 y 20 de diciembre de 2001".
- Dierckxsens, Wim y Formento, Walter (2016). *Geopolítica de la crisis económica mundial. Globalismo vs. Universalismo*. Buenos Aires, Fabro.
- Formento, Walter (2012). “Saques, monopolio mediático y corporación financiera”. En: *Nueva forma de capital y comunicación*, revista del CIEPE, pp. 14-18. Bs. As.
- Formento, Walter y Merino, Gabriel (2011). *Crisis financiera global. La lucha por la configuración del orden mundial*. Buenos Aires, Peña Lillo/Continente.

- Gordillo, Mónica (2010). *Piquetes y cacerolas...El argentinazo del 2001*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Kan, Julián (2009). "Vuelta previa al 2001. La devaluación del real de 1999 y algunas implicancias en la burguesía argentina". En: Alberto Bonnet y Adrián Piva, ed., *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*, Buenos Aires, Peña Lillo/Continente.
- Merino, Gabriel E. (2013). "Lucha por la hegemonía y procesos instituyentes en la Argentina del 2001: claves para entender el posneoliberalismo". *Question*, Vol. 1, Nro. 38.
- Piva, Adrián (2009). "Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001", en: Alberto Bonnet y Adrián Piva, ed., *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*, Buenos Aires, Peña Lillo.
- Svampa, Maristella (2005). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires, Taurus.